



## **Asamblea General**

Distr. GENERAL

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/11  
2 de diciembre de 1996

ESPAÑOL  
Original: FRANCÉS

COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  
EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

### **JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SOBRE TEXTOS DE LA CNUDMI**

#### Índice

#### *Página*

I.	Decisiones relativas a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM) .....	2
II.	Decisiones relativas al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (Reglas de Hamburgo) (RH) .....	10
III.	Información adicional .....	11

### **INTRODUCCIÓN**

La presente recopilación de resúmenes forma parte del sistema de recopilación y difusión de información sobre fallos judiciales y laudos arbitrales relacionados con las convenciones y leyes modelos emanadas de la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Para informarse de las características y modo de empleo de este sistema, sírvase consultar la Guía del usuario (A/CN.9/SER.C/GUIDE/1).

De no indicarse otra cosa, los resúmenes son obra de los corresponsales nacionales designados por sus respectivos gobiernos. Cabe señalar que ni los corresponsales nacionales ni nadie directa o indirectamente relacionado con el funcionamiento del sistema asume responsabilidad alguna por los errores, omisiones u otros defectos.

Copyright @ Naciones Unidas 1996  
Impreso en Austria

Reservados todos los derechos. Este documento puede reproducirse en su totalidad o en parte pidiendo autorización al Secretario del Comité de Publicaciones de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos de América. Las autoridades y las instituciones públicas pueden reproducir el documento en su totalidad o en parte sin necesidad de pedir autorización, pero se ruega que lo comuniquen a las Naciones Unidas.

## **I. DECISIONES RELATIVAS A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS (CIM)**

### **Caso 150: CIM 1-1a); 35**

#### **Francia: Cour de cassation (1ère ch. civile)**

23 de enero de 1996

Sociedad SACOVINI c. SARL LES FILS DE HENRI RAMEL

Original en francés

Publicado en francés: Recueil Dalloz Sirey 1996, Jurisprudence, 334; [1996] UNILEX

Acta en inglés: [1996] UNILEX

Comentario en francés: C. Witz, Recueil Dalloz Sirey 1996, Jurisprudence, 334

La sociedad vendedora, con domicilio legal en Italia, concertó en 1988 varios contratos de compraventa de vino con compradores franceses. Habiendo tomado conocimiento de que ese mismo año se había importado en Francia vino italiano adulterado, los compradores expusieron el caso al Servicio de represión de fraudes, el cual llegó a la conclusión de que, efectivamente, el vino era adulterado.

Los comerciantes franceses pidieron entonces, ante el Tribunal de Comercio de Sète y más tarde ante el Tribunal de Apelaciones de Montpellier, la rescisión de las compraventas relativas al vino en litigio así como la indemnización del daño material y moral que habían sufrido.

El Tribunal de Apelaciones, aplicando el derecho nacional francés, ordenó la rescisión de las ventas de los lotes de vino por culpa exclusivamente del vendedor, quien no había respetado su obligación contractual de entregar un vino conforme al contrato y con arreglo a las normas de honor y probidad.

La sociedad Sacovini apeló al Tribunal de Casación sin invocar la aplicación de la CIM. La apelante impugna la decisión del Tribunal de Apelaciones de ordenar la rescisión por culpa del vendedor, alegando que la entrega de un vino azucarado no puede, a su juicio, constituir un incumplimiento de las obligaciones del vendedor. Por otra parte, el vendedor italiano sostiene que no hay relación de causalidad entre el azucaramiento del vino y el perjuicio alegado, en razón de haberse constatado, en ciertos lotes, que las condiciones del transporte habían desnaturalizado el vino haciéndolo no apto para el consumo.

El Tribunal de Casación rechazó la apelación, por considerar que el contrato en litigio era una compraventa internacional de mercaderías a la que debía aplicarse la CIM, que había entrado en vigor el 1 de enero de 1988 entre Francia e Italia, y que el Tribunal de Apelaciones había respetado las disposiciones de ese tratado, especialmente su artículo 35, al fallar que la sociedad Sacovini, que había entregado un vino azucarado, no había cumplido su obligación de entregar una mercadería conforme al contrato. Por último, en lo que se refiere a la falta de causalidad entre el azucaramiento del vino y el perjuicio alegado, Tribunal de Casación se remitió a la comprobación soberana de los jueces que entendieron sobre el fondo, según los cuales la manipulación del vino, por sí sola, lo había desnaturalizado haciéndolo impropio para el consumo.

**Caso 151: CIM 1-1 a); 6; 55****Francia: Cour d'appel de Grenoble (ch. commerciale)**

26 de abril de 1995

Empresa Alain VEYRON c. Sociedad E. AMBROSIO

Original en francés

Publicado en francés: [1996] UNILEXActa en inglés: [1996] UNILEX

Una sociedad con domicilio legal en Italia concertó en 1989 un contrato de colaboración comercial con una persona física con domicilio legal en Francia. Esta última se constituyó en representante e importador exclusivo de los productos de confitería exportados por la empresa italiana. Un año más tarde, la sociedad italiana rompió el acuerdo de colaboración, lo cual dio lugar al litigio.

El Tribunal de Apelaciones expresa que el contrato de colaboración comercial trata, por una parte, de la compraventa y por la otra, de la representación, y que la parte relativa al derecho de la compraventa se rige por la CIM en razón de haber sido concertada entre un vendedor y un comprador establecidos, respectivamente, en Italia y en Francia, ambos Estados Contratantes de la CIM (art. 1-1 a)).

El Tribunal de Apelaciones se pronuncia sobre una posible responsabilidad de la sociedad italiana en la ruptura del contrato, en relación con la parte del contrato de colaboración comercial relativa a la compraventa. El Tribunal se basa en una disposición del contrato de colaboración según la cual éste se puede revocar, sin que el agente tenga la posibilidad de oponerse. El Tribunal dice también que la empresa italiana no tiene obligación de pagar suma alguna por la ruptura del contrato, y señala que ese tipo de estipulación no está prohibida por la CIM y que las partes pueden convenir que el vendedor tiene la posibilidad de negarse a continuar la relación contractual siempre que eso no afecte a la ejecución de un contrato de compraventa concertado anteriormente. El Tribunal observa que en este caso no se ha alegado que la decisión de romper la relaciones se haya traducido en una negativa a ejecutar un pedido hecho con anterioridad, o en su ejecución en forma incompleta. Por esta razón, los jueces concluyen que la sociedad italiana no ha cometido ninguna falta al romper la parte del contrato de colaboración comercial relativa a la compraventa.

El Tribunal de Apelaciones se pronuncia también acerca de la interpretación del artículo 55 de la CIM, invocado por el agente comercial, quien alega que su sucesor se ha beneficiado de precios inferiores a los que le habían sido facturados y pide al Tribunal que reduzca en la forma correspondiente la suma reclamada por el exportador italiano. El Tribunal de Apelaciones dice que “la referencia al precio de mercado que figura en el artículo 55 de la CIM, en la medida en que dicho artículo sea aplicable al caso, pierde precedencia ante un acuerdo en contrario de las partes, así como también la pierden todas las disposiciones de la CIM, con excepción del artículo 12 (art. 6)”. El Tribunal de Apelaciones observa también que las reclamaciones del agente relativas a un aumento de los precios que tuvo lugar en 1990 no afecta al contrato de compraventa en si mismo sino que expresan solamente reivindicaciones de carácter general acerca de las relaciones comerciales de las partes y de las dificultades planteadas por la competencia. Por último, el Tribunal de Apelaciones observa que el agente comercial recibió las mercaderías sin objetar de manera precisa su precio de venta, por lo que el exportador, de conformidad con el artículo 8, párrafos 2 y 3 de la CIM, pudo interpretar ese comportamiento como una indicación de la aceptación del precio.

**Caso 152: CIM 1-1 b); 35; 48-1; 49; 78**

**Francia: Cour d'appel de Grenoble (ch. commerciale)**

26 de abril de 1995

MARQUES ROQUE Joaquim c. SARL HOLDING MANIN RIVIÈRE

Original en francés

Publicado en francés: [1996] UNILEX

Acta en inglés: [1996] UNILEX

Un sociedad con domicilio legal en Francia vendió a una persona física domiciliada en Portugal un galpón usado por un precio de 500.000 francos franceses, que comprendía el desmontaje y la entrega de la posesión (precio del galpón: 381.200 francos franceses; precio del desmontaje y entrega de la posesión: 118.800 francos franceses). A raíz de la negativa del comprador de liquidar la última fracción del precio alegando que los elementos metálicos desmontados eran defectuosos, el Tribunal de Apelaciones de Grenoble expresa que el contrato en litigio incluía la venta de un galpón usado, así como su desmontaje y que de las facturas presentadas resulta que la prestación del servicio no era decisiva. El Tribunal concluye que el contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de la CIM (art. 3-2)

El Tribunal de Apelaciones subraya seguidamente que el contrato fue concertado entre un vendedor establecido en Francia y un comprador establecido en Portugal, que Francia es un Estado Contratante de la CIM mientras que Portugal no la firmado ni ratificado y que es necesario determinar si la CIM puede ser aplicable por extensión de las normas del derecho internacional privado (art. 1-1 b)).

De conformidad con el Convenio de La Haya, del 15 de junio de 1955, sobre la ley aplicable a las ventas de caracter internacional de bienes muebles corporales, el Tribunal aplica la ley francesa, por ser la ley del país donde el vendedor tenía su residencia habitual en el momento en que recibió el pedido (art. 3-1 del Convenio de La Haya). El Tribunal aplica también la CIM porque “desde el 1 de enero de 1988, la ley nacional francesa aplicable a las compraventas internacionales es la Convención de Viena del 11 de abril de 1980”. Los jueces consideraron, a la luz del artículo 35 de la CIM, que una cierta cantidad de mercaderías no son aptas para el uso especial de volverlas montar en forma idéntica, que expresamente se haya hecho saber al vendedor. Como ese defecto afecta a sólo una parte del galpón y concierne a los elementos metálicos que se pueden reparar, no constituye una contravención esencial que prive al comprador de lo que podía esperar en virtud del contrato. Los jueces concluyen que esa contravención no justifica una rescisión del contrato por aplicación del artículo 49.

El Tribunal observa seguidamente que no había lugar a esa rescisión, dado que las partes habían previsto que el vendedor repararía los elementos metálicos dañados. A la objeción del comprador según la cual el acuerdo comprendía una reparación total, los jueces comprueban que no se ha establecido que el vendedor haya aceptado tal obligación, cuyo resultado sería la multiplicación por 40 del valor de ciertos elementos vendidos. Al poner a disposición del comprador piezas de recambio con deformaciones sólo ligeras, el vendedor a reparado, de conformidad con el artículo 46-3 de la CIM, la falta de conformidad de las mercaderías vendidas.

El Tribunal concede daños y perjuicios al comprador tras observar que éste conserva el derecho de reclamar daños y perjuicios pese a la reparación en especie hecha por el vendedor (art. 48-1)

Por último, en cuanto a los intereses por mora y a la capitalización de los intereses reclamados por el vendedor, el Tribunal de Apelaciones observa que el artículo 78 de la CIM expresa que toda demora en el pago da derecho a percibir los intereses correspondientes sin demora y que éstos correrán a partir de la fecha en que el comprador tuvo en su posesión las mercaderías de reemplazo. El Tribunal decide que los intereses se capitalizarán

después de transcurrido un año entero a contar de la finalización de la apelación en la que el vendedor planteó por primera vez la demanda.

**Caso 153: CIM 1-1 a); 29-1; 31 a) y c); 57-1; 78**

**Francia: Cour d'appel de Grenoble (ch. commerciale)**

29 de marzo de 1995

Sociedad CAMARA AGRARIA PROVINCIAL DE GUIPUZCOA c. André MARGARON

Original en francés

Publicado en francés: [1995] UNILEX, E.95-2

Acta en inglés: [1995] UNILEX, D.95-2

Un vendedor francés y un comprador español habían concertado varios contratos de venta de maíz. Todas las partidas se entregaron, pero el comprador no ha pagado la totalidad del precio. El vendedor inició una acción judicial contra el comprador en un tribunal francés, demandando el pago del precio más intereses

En primera instancia, el Tribunal de Instancia Superior de Grenoble, sin aplicar la CIM, condenó al comprador a pagar la totalidad del precio pero consideró que el vendedor no tenía derecho al pago de intereses.

El comprador interpuso apelación, alegando que el tribunal francés no tenía competencia y pidiendo además una reducción del precio en base a lo acordado en una reunión de las partes posterior a la concertación del contrato.

El Tribunal de Apelaciones dictaminó que la CIM era aplicable porque se trataba de un contrato de compraventa internacional de mercaderías concertado entre dos partes establecidas en dos Estados diferentes, ambos Estados Contratantes de la CIM.

Para determinar el lugar del pago del precio, el Tribunal de Apelaciones reproduce el texto del apartado 1 del artículo 57, así como los puntos a) y c) del artículo 31, y dictamina en consecuencia que la obligación de pagar el precio debe cumplirse en la jurisdicción del Tribunal de Instancia Superior de Grenoble, ya sea que el pago haya estado subordinado o no a la entrega de las mercaderías.

En lo que respecta a la reducción del precio demandada por el comprador, el Tribunal consideró que, sobre la base del artículo 29 de la CIM, un contrato puede ser modificado por un simple acuerdo de las partes. No obstante, dictaminó que la modificación del precio de venta no podía resultar, como en este caso, del ambiente general de una reunión.

Se reconoció el derecho del vendedor de cobrar el precio más intereses por mora. El Tribunal de Apelaciones se refirió a tal efecto al artículo 78 de la CIM y comprobó que, a diferencia del derecho francés, no era necesario efectuar un requerimiento. Por último, el Tribunal de Apelaciones falla en favor de la capitalización de los intereses solicitada por el vendedor.

**Caso 154: CIM 1-1 a); 7-1; 8-1; 25; 64-1; 73-2**

**Francia: Cour d'appel de Grenoble (ch. commerciale)**

SARL BRI PRODUCTION "BONAVENTURE" c. Sociedad PAN AFRICA EXPORT

22 de febrero de 1995

Original en francés

Publicado en francés: [1995] UNILEX, E.95-L; Journal du droit international 1995, 632

Acta en inglés: [1995] UNILEX, D.95-1

Comentario: Ph. Kahn, Journal du droit international 1995, 639

Un vendedor francés, fabricante de jeans, concertó un contrato de compraventa de una cierta cantidad de mercaderías con un comprador establecido en los Estados Unidos. Estaba previsto que los jeans comprados se destinarían al África y la América del Sur.

Tanto durante las negociaciones previas al contrato como durante su ejecución, el vendedor solicitó, constantemente y con insistencia, pruebas del destino de las mercaderías vendidas. Durante el envío de una segunda remesa se comprobó que las mercaderías se habían entregado en España.

La negativa del vendedor a proseguir las relaciones comerciales y enviar nuevas remesas dio origen al litigio.

El Tribunal de Apelaciones se refiere al artículo 1-1 a) de la CIM para determinar el derecho aplicable a este caso, dado que el comprador y el vendedor son entidades establecidas en Estados diferentes, ambos Estados Contratantes la CIM.

El Tribunal se basa en el artículo 8-1 de la CIM para dictaminar que la empresa norteamericana no respetó la intención de la empresa francesa, que era de conocer el destino dado a las mercaderías. Esa actitud constituye un incumplimiento esencial del contrato, en el sentido del artículo 25 de la CIM.

Según el artículo 64-1, el vendedor podrá declarar resuelto el contrato. El Tribunal de Apelaciones mantiene esa rescisión apoyándose también en el artículo 73-2 relativo a los contratos que estipulen entregas sucesivas.

Por último, condena a la empresa norteamericana a pagar la suma de 10.000 francos franceses por concepto de daños y perjuicios en razón de abuso de procedimiento, por considerar que el comportamiento del comprador “es contrario al principio de buena fe en el comercio internacional, según se dispone en el artículo 7 de la CIM, con el agravante de haber asumido la posición de parte demandante en proceso judicial, lo que caracteriza el abuso de procedimiento”.

**Caso 155: CIM 19-2; 86-1****Francia: Cour de cassation (1ère ch. civile)**

Fallo por el que se rechaza la apelación contra el fallo del Tribunal de Apelaciones de París del 22.04.92

4 de enero de 1995

Sociedad FAUBA c. Sociedad FUJITSU

Original en francés

Publicado en francés: Recueil Dalloz Sirey 1995, Jurisprudence, 289; [1996] UNILEX ; Witz, Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale - Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, París, (1995) 140

Comentario en francés: Witz, véase Recueil Dalloz Sirey 1995, Jurisprudence, 290; Witz, véase L.G.D.J. supra (1995) 61; 69

Acta en inglés: [1996] UNILEX

El Tribunal de Casación ha rechazado la apelación presentada por el comprador francés contra el fallo del Tribunal de Apelaciones de París relativo a la formación del contrato de compraventa. El comprador alega que el contrato no ha llegado a formarse y que, al decidir en contrario, el Tribunal de Apelaciones ha violado el artículo 19 de la CIM. El Tribunal de Apelaciones habría violado también el artículo 86 de la CIM al dictaminar que el comprador debió haber devuelto inmediatamente las mayores cantidades de material entregadas.

El Tribunal de Casación reconoce el poder soberano de los jueces que entendieron en el fondo de la causa, en cuanto a la existencia de un acuerdo entre las partes respecto del objeto y el precio, comprendida una revisión del precio inicial en función del mercado y las modificaciones introducidas al pedido. A este respecto, el Tribunal de Casación no menciona ninguna disposición de la CIM.

En segundo lugar, el Tribunal de Casación recuerda el contenido del apartado 1 del artículo 86 de la CIM, según el cual el comprador que haya recibido las mercaderías y tenga la intención de rechazarlas, tiene derecho a retener las mercaderías hasta que haya obtenido del vendedor el reembolso de los gastos razonables que haya realizado para conservarlas. Al rechazar la apelación sobre este punto, el Tribunal de Casación observa que el comprador “en ningún momento alega haber realizado dichos gastos respecto de las mercaderías que no se ajustaban a su pedido”.

**Caso 156: CIM 57-1 a)****Francia: Cour d'appel de Paris (1ère ch., sect. urgence)**

10 de noviembre de 1993

Sociedad LORRAINE DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES c. BANQUE PARIBAS BELGIQUE S.A. y

Sociedad BVBA FINECCO

Original en francés

Publicado en francés: Juris-Classeur Périodique, éd. G, 1994, II, n° 22314; [1995] UNILEX, E.93-23;

Journal du droit international 1994, 678

Acta en inglés: [1995] UNILEX, D.93-23

Comentario: Audit, Juris-Classeur Périodique, éd. G, 1994, II, n° 22314 ; Jacquet, Journal du droit international 1994, 683; Dubarry-Loquin, Revue trimestrielle de droit commercial 1994, 698

En julio de 1991, un vendedor francés y un comprador belga celebraron un contrato de compraventa de chapas. El pago del precio estaba garantizado por un banco belga.

Ante la falta de pago por el comprador en la fecha convenida, el vendedor inicia una demanda judicial de pago ante un tribunal francés (Tribunal de Comercio de Bobigny) contra el comprador y su garante.

El Tribunal de Comercio se declara incompetente y remite la causa y las partes en su conjunto al Tribunal de Gand (Bélgica).

El vendedor impugna esa decisión, invocando la competencia del tribunal francés.

El Tribunal de Apelaciones aplica la CIM para determinar el lugar del pago del precio. Considera que, en virtud del artículo 57 de la CIM, el precio debe ser pagado en el domicilio del vendedor, a menos que las partes hayan estipulado otra cosa.

Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones afirma su competencia.

### **Caso 157: CIM 3-1**

#### **Francia: Cour d'appel de Chambéry (ch. civ.)**

25 de mayo de 1993

Sociedad AMD ELECTRONIQUE c. Sociedad ROSENBERGER SIAM S.p.A

Original en francés

Publicado en francés: Revue de Jurisprudence Commerciale 1995, 242; [1995] UNILEX, E.93-16

Acta en francés: Bull. inf. C. cass, 01-10-1993, 35

En inglés: [1995] UNILEX, D.93-16

Comentario en francés: Witz, Claude, Revue de Jurisprudence Commerciale 1995, 244; Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale - Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, París, (1995) 34

El comprador, una sociedad de derecho italiano, hace en febrero de 1990 un pedido de conectadores a la empresa francesa vendedora. Según los términos del contrato, los conectadores debían fabricarse según las especificaciones proporcionadas por la sociedad Rosenberger y ser sometidos a control según las normas escogidas y comunicadas por esa sociedad.

Entre las partes se plantean ciertas dificultades. El 18 de junio de 1991, el vendedor demanda a la otra parte en el contrato ante el Tribunal de Instancia Superior de Bonneville el pago del precio por las mercaderías entregadas y no liquidadas. El comprador sostiene la incompetencia de la jurisdicción francesa y la competencia de la jurisdicción italiana. El 6 de enero de 1993, el Tribunal se excusa en razón de que el demandado tiene domicilio en Italia y que la entrega se realiza también en Italia.

El vendedor apela.

A fin de determinar el lugar de cumplimiento de la obligación de pagar el precio, en el marco de la aplicación del artículo 5-1 de la Convención de Bruselas relativa a la competencia judicial y la ejecución de decisiones en materia civil y comercial, el Tribunal de Apelaciones verifica la aplicabilidad de la CIM. Considera que el contrato en litigio no es una compraventa en el sentido de la CIM, que no es aplicable cuando, como en este caso, la parte que hace el pedido proporciona “una parte esencial de los elementos materiales necesarios para esa fabricación o producción” (véase el apartado 1 del capítulo 3 de la CIM).



**Caso 158: CIM 1-1 b); 23****Francia: Cour d'appel de Paris(15ème ch.)**

22 de abril de 1992

Sociedad FAUBA c. Sociedad FUJITSU

Original en francés:

Publicado en francés: [1996] UNILEX ; Witz, Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale - Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des Affaires, París, (1995), 135

Comentario en francés: Witz, V., L.G.D.J. ci-dessus, 29;59;69; Witz, Recueil Dalloz Sirey 1995, 19è Cahier, Chronique, 143

Acta en inglés: [1996] UNILEX

El demandante, un comprador francés, había hecho un pedido el 22 de marzo de 1990 de varios lotes de elementos electrónicos al demandado, un vendedor alemán, por intermedio de la oficina de enlace del demandado en Francia. El comprador había aceptado el precio previamente indicado por el proveedor, pero había pedido que se revisara a la baja en función del mercado. Al aceptar el pedido, el vendedor respondió que el precio se podía revisar al alza o a la baja en función del mercado como se había convenido, pero que no podía proveer ciertas piezas. El 26 de marzo la partes mantuvieron una conversación telefónica y el mismo día el vendedor alemán dirigió a su contraparte un télex en el que deja constancia del acuerdo de este último respecto de la modificación de una parte del pedido. Por télex del 13 de abril, el comprador francés modifica nuevamente su pedido, cambio que el vendedor alemán declaró que no podía aceptar respecto de las entregas a corto plazo.

Ante el Tribunal de Apelaciones de París, el demandante sostuvo que el contrato no se había formado a raíz de las modificaciones hechas al pedido inicial y que habían provocado un desacuerdo entre las partes, e invocó a tal efecto el artículo 19 de la CIM. El demandante sostuvo además que, de conformidad con el artículo 4 de ese instrumento, había que tener en cuenta el derecho común francés en lo que hacía al precio de venta.

El Tribunal de Apelaciones consideró que la oficina de enlace del vendedor en Francia carecía de la personalidad jurídica apropiada y que se trataba, por lo tanto, de un contrato internacional de compraventa entre una sociedad francesa y una sociedad alemana. El Tribunal decidió que, en este caso, era aplicable la CIM (art. 1-1 b)).

En lo que respecta a la formación del contrato, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que el contrato se había formado y era válido en razón del consentimiento dado por las partes en cuanto al objeto y al precio, y que, de conformidad con al artículo 23 de la CIM, tenía efecto desde el momento de la recepción por el comprador de la aceptación del pedido por el vendedor. Por otra parte, respecto del argumento presentado por el comprador de que el vendedor había entregado mercaderías en exceso, el Tribunal de Apelaciones expresa que si la cantidad de material entregada no corresponde a la del pedido, el comprador debe devolver inmediatamente el excedente de mercaderías. Por último, en lo que se refiere al precio, el Tribunal subraya que el acuerdo entre las partes de revisar el precio en función del mercado no impide la determinación del precio, sin indicar en qué principios jurídicos se basa para considerar que el precio se puede determinar.

## **II. DECISIONES RELATIVAS AL CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS (REGLAS DE HAMBURGO) (RH)**

### **Caso 159: RH 2-1 b); 4-2 b); 5-1**

#### **Francia: Tribunal de commerce de Marseille**

23 de enero de 1996

Compagnie sénégalaise d'assurances et de réassurances-CSAR y otras 27 empresas c. Roscoe Shipping CO, M. le Capitaine du navire "World Appolo", Steaming Mutual Underwriting Association.

Original en francés

Publicado en francés: Revue de droit commercial, maritime, aérien et des transports 1996, 51

El porteador había aceptado sin ninguna reserva un cargamento de bolsas de arroz en un puerto tailandés, con destino al puerto de Dakar, en el Senegal.

El asegurador de la nave había enviado al consignatario una carta de garantía por las indemnizaciones que pudieran aplicarse al naviero, en razón de su responsabilidad como porteador. Según esa carta, el asegurador de la nave se compromete a liquidar, hasta un cierto límite, toda indemnización definitiva que determine el Tribunal de Comercio de Marsella o el Tribunal de Apelación competente.

A la llegada, se realizó una pericia amigable contradictoria durante la descarga y se comprobó la existencia de daños sucesivos y deficiencias por una cierta suma.

Tras indemnizar al consignatario, sus aseguradores iniciaron una acción judicial ante el Tribunal de Comercio de Marsella en base a un derecho jurídico de subrogación contra el porteador marítimo y sus aseguradores.

El Tribunal de Comercio aplicó las RH, basándose en su artículo 2-1 b) que estipula que “Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a todos los contratos de transporte marítimo entre dos Estados diferentes, siempre que: (...) El puerto de descarga previsto en el contrato de transporte marítimo esté situado en un Estado Contratante...”.

Para determinar la responsabilidad del porteador por los daños que se produjeron durante la descarga, el Tribunal hace referencia al artículo 4-1 de las RH, según el cual “La responsabilidad del porteador por las mercancías en virtud del presente Convenio abarca el período durante el cual las mercancías están bajo la custodia del porteador en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga”; el artículo 4-2 b)i) aclara que se considerará que las mercancías están bajo la custodia del porteador hasta el momento en que las haya entregado, poniéndolas en poder del consignatario.

El Tribunal determinó que las RH no definen formalmente el momento de la entrega y consideró que, a falta de una limitación de carácter imperativo, el porteador puede incontestablemente invocar una entrega en el momento de la apertura de las escotillas y el traspaso de la posesión de las mercancías.

El Tribunal observa que en el conocimiento de embarque se indica “Dakar free out” y que dicha mención no sólo impone los gastos de la descarga al consignatario sino que indica también que todos daños consecutivos a esa descarga no se pueden imputar al porteador marítimo cuya responsabilidad, según el artículo 5-1 de las RH, está determinada de pleno derecho respecto de los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías que se produjeron antes de la entrega, a menos que pruebe que ha adoptado “todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias”.

Sobre esta base, el Tribunal hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios de los aseguradores del consignatario.

**Caso 160: RH 16**

**Túnez: Tribunal de première instance de Tunis (9ème ch.)**

2 de noviembre de 1994

Société tuniso-européenne d'assurances et de réassurances "carte" c. Sudcargos

Original en francés

Publicado: Revue de droit commercial, maritime, aérien et des transports 1996, 40

(Resumen preparado por David Morán Bovio)

La empresa demandada había transportado las mercancías, por cuenta del consignatario, hasta el puerto de Radés, en Túnez. Al embarcar las mercancías, la demandada había estipulado una reserva en el conocimiento de embarque, en virtud de la cual se liberaba al porteador de toda responsabilidad por el número y el contenido de los bultos, ya que los contenedores se le habían entregado sellados con precintos de plomo y era imposible verificar la veracidad de las designaciones de las mercancías indicadas en el conocimiento de embarque.

Tras la descarga, el consignatario se dio cuenta de que ciertos bultos habían desaparecido. Puso en conocimiento del hecho a su asegurador, el cual pagó la indemnización correspondiente. El asegurador presentó una acción judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de Túnez para que se estableciera la responsabilidad del porteador marítimo y se le hiciera pagar el valor de las mercancías desaparecidas.

El Tribunal aplicó el artículo 16 de las RH, ratificadas por la República de Túnez, que autoriza al porteador a incluir reservas cuando tenga motivos de sospecha graves para dudar de la veracidad de los datos presentados por el expedidor en el conocimiento de embarque. Por consiguiente, incumbe al consignatario probar la veracidad de los datos para asignar la responsabilidad al porteador. Ahora bien, el consignatario no probado ni el número ni el contenido de los bultos entregado al porteador en el punto de partida.

El Tribunal dictaminó que los daños no habían sido demostrados y que, por lo tanto, no se podía imputar responsabilidad alguna al porteador.

### III. INFORMACIÓN ADICIONAL

Caso 134

Publicado en alemán: OLG München, 8.3.1995 (7 U 5460/94), Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1996, 854.

\* \* \*